



Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the [license](#). [Advertencia](#).

Usted es libre de:

Compartir — copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato

Adaptar — remezclar, transformar y construir a partir del material para cualquier propósito, incluso comercialmente.

La licenciente no puede revocar estas libertades en tanto usted siga los términos de la licencia



Bajo los siguientes términos:



Atribución — Usted debe dar [crédito de manera adecuada](#), brindar un enlace a la licencia, e [indicar si se han realizado cambios](#). Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que usted o su uso tienen el apoyo de la licenciente.

No hay restricciones adicionales — No puede aplicar términos legales ni [medidas tecnológicas que restrinjan legalmente a otras a hacer cualquier uso permitido por la licencia](#).

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es>

LA CONSULTA PREVIA COMO GARANTÍA DE LAS COMUNIDADES ÉTNICAS A LA LUZ DE LA NORMATIVA VIGENTE EN EL TERRITORIO COLOMBIANO.¹

PRIOR CONSULTATION AS A GUARANTEE OF THE ETHNIC COMMUNITIES IN LIGHT OF THE REGULATIONS IN FORCE IN THE COLOMBIAN TERRITORY

DIEGO ALEJANDRO PICO TORRES

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA

1. Resumen

El presente artículo analiza el contenido del derecho a la Consulta Previa y el consentimiento libre, previo e informado, sus antecedentes legales y jurisprudenciales en Colombia y América Latina, a partir de la lectura del Convenio 169 de la OIT, y del estudio de fallos de la Corte Constitucional de Colombia y algunos Tribunales Constitucionales pertenecientes a diferentes países de la región. El propósito de la investigación es realizar una descripción de los derechos consagrados en el Convenio 169 de la OIT y la protección que se le ha dado dentro del ordenamiento jurídico colombiano, además de poner en contexto el procedimiento por medio del cual se adelanta su aplicación.

Palabras Clave: Comunidades étnicas, Convenio 169 de la OIT, Consulta Previa, Consulta, Participación.

2. Abstract

This article analyzes the content of the right to Prior Consultation and free, prior and informed consent, its legal and jurisprudential background in Colombia and Latin America, based on the reading of ILO Convention 169, and the study of rulings in the Constitutional Court of Colombia and some Constitutional Courts belonging to different countries in the region. The purpose of the research is to make a description of the rights enshrined in ILO Convention 169 and the protection that has been given within the Colombian legal system, in addition to putting in context the procedure by which its application is advanced.

¹Artículo de investigación para optar por el título de Abogado, bajo la dirección de la Dr. Cesar Augusto Ramírez Corzo docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Colombia. Egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Colombia, código estudiantil: 2111792, correo electrónico: dapico92@ucatolica.edu.co.

Keywords: Ethnic communities, OIT Convention 169, Prior Consultation, Rights, Constitutional Court.

3. Introducción

La Concepción del Estado Social de Derecho introducida por la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, representó una transformación de la idea del modelo de Estado que se tenía por esa época en Colombia, y con ella se instauró una Constitución Política garantista, incluyente y pluralista, que reconoció la diversidad étnica, cultural y religiosa existente en nuestra nación, modificando de esta manera la forma de pensamiento que se tenía desde la Constitución de 1886, adaptándose en ese momento a la dinámica social exigida por la sociedad Colombiana. Fueron estos cambios los que permitieron la aprobación del Convenio 169 de la OIT a nuestra legislación, el cual se encarga de proteger el derecho a la Consulta Previa y al consentimiento libre, previo e informado de las comunidades étnicas, en busca de generar un cambio en el pensamiento de la sociedad que permita visibilizarlo y claramente evitar su vulneración. El presente artículo se desarrollará teniendo en cuenta los actores que intervienen en la ejecución de este derecho, (comprendiendo que estos son legislación-Estado, legislación-comunidad, Estado-comunidad, comunidad-sociedad) puesto, que su constante interacción es fundamental en el procedimiento de la Consulta. Parsons concibe a este tipo de relaciones sociales como un sistema en donde adquieren gran relevancia los grupos que la integran, y en donde su permanente intercomunicación dentro de un mismo contexto social, cultural y económico permite que el contacto y las circunstancias sociales que se presentan en su interior se modifiquen periódicamente (Ramírez, 2011, pág. 63). Incluso adoptando una interpretación más clásica del modelo de interacción propuesto por Parsons, podemos deducir que este sistema se compone de al menos dos actores, que en nuestra investigación serían las Comunidades y el Estado (Ramírez, 2011, pág. 63). Estos participantes además nos llevan a abordar la investigación desde la sociología del derecho, que es definida por Germán Silva como: “la especialidad de la sociología que conoce acerca de las instituciones (estructuras) relativas al control jurídico en su relación con las prácticas sociales (interacciones) que acaecen en la sociedad” (Carvajal, 2011, págs. 114-115). Puesto que son ellas quienes tienen una incidencia directa en el desarrollo del procedimiento, y es su participación la que garantiza que se cumpla con el Convenio 169 de la OIT, situación que en su procedimiento tiene una serie de obstáculos

que inicialmente se relacionan con los intereses propios que persiguen los actores, y que impiden de un lado que se desarrollen los proyectos propuestos, y del otro que se lleven a cabo consultas de buena fe.

La Consulta Previa es quizás uno de los derechos que mayor relevancia ha alcanzado en lo que se refiere a garantías de derechos y libertades de las Comunidades Étnicas, ya que por medio de este se garantiza el cumplimiento efectivo de derechos como la propiedad, la participación, la libre autodeterminación, la salud y la educación, además de otros derechos fundamentales y colectivos a que tienen lugar estos pueblos. En Colombia el desarrollo de la Consulta Previa no ha tenido un fuerte impacto ni en el Legislativo ni en el Ejecutivo, incluso se podría afirmar que el Legislativo ha mostrado poco interés en el reconocimiento de este derecho, y el Ejecutivo aunque ha intentado ceñirse a los fallos de la alto tribunal constitucional no ha implementado medidas concretas que permitan otorgar garantías a este derecho, es por esta razón que la rama judicial en cabeza de la Corte Constitucional ha adoptado en su jurisprudencia una serie de decisiones para la protección de este derecho, tomando como base los parámetros establecidos por los organismos internacionales y por el Convenio 169 de la OIT.

4. Antecedentes de la Consulta Previa

4.1 Antecedentes Internacionales

La consulta previa ha ocupado la agenda política y legislativa de diferentes organizaciones internacionales a nivel mundial producto de la desigualdad en la que se encuentran las diferentes Comunidades Étnicas frente al Estado y a la misma sociedad, siendo este fin proteccionista el que ha llevado a evitar la constante exclusión de estos grupos minoritarios y a reducir tratos discriminatorios frente a estas comunidades. Pero cabe destacar que diferentes situaciones sociales han generado que este derecho también sea utilizado como vía de discriminación, debido a que su utilización en asuntos como la explotación de recursos naturales y su realización en temas relacionados con el medio ambiente, usualmente limitan y retrasan los proyectos extractivos en sus territorios, ocasionando que tanto el Estado como las compañías privadas se abstengan de cumplir el Convenio, y rechacen a las comunidades por representar un obstáculo para la materialización de sus obras. Estas circunstancias se deben en gran parte a las diferencias entre los estilos de vida de las comunidades étnicas que tienen su propias cosmovisión del

mundo, y la de grupos sociales pertenecientes a las formas de vida moderna, representando claramente una dificultad para la democracia pluralista consagrada en la Constitución Política de 1991 (Sierra, 2017, pág. 140).

Pero la implementación de diferentes convenios y tratados internacionales pretenden precisamente cerrar esa brecha social que se ha generado y que claramente impiden el progreso y el desarrollo no solamente de las comunidades, sino también de la sociedad misma. Es por las razones anteriormente expuestas que en el año 1977 por medio de la Conferencia de organizaciones no gubernamentales se dio un primer acercamiento en el escenario internacional, con el fin de discutir situaciones que afectaban en ese entonces directamente a Comunidades Indígenas (Carrión, 2012, pág. 9). En dicha conferencia se debatieron posibles soluciones a tratos discriminatorios y racistas en contra de estos grupos minoritarios (Carrión, 2012, pág. 9). Además de analizar escenarios en los que se les reconociera a este sector de la población un papel más importante en el “desarrollo político, económico, social, cultural y espiritual de las sociedades en todo el mundo” (Carrión, 2012, pág. 9).

La Conferencia realizada en 1977, sentó las bases y abrió la puerta a que en diferentes escenarios internacionales se incluyeran dentro de sus agendas discusiones relacionadas con la promulgación de leyes que garantizaran derechos fundamentales en favor de las Comunidades Indígenas, siendo quizás este el primer gran resultado obtenido como producto de esta Conferencia, que además originó una regulación extensa de estos temas en diferentes Tratados Internacionales; e introdujo la posibilidad de que se crearan “espacios de diálogos en instancias internacionales como Naciones Unidas para sentar las bases del reconocimiento de algunos de los pueblos indígenas, entre ellos el de la consulta previa, libre e informada” (Carrión, 2012, pág. 9). En nuestra región la Corte Interamericana de Derechos Humanos en diferentes fallos a reconocido derechos que deben ser aplicados por medio de la realización del mecanismo de participación ya enunciado, en este sentido el tribunal de Derechos Humanos señaló que en aras de garantizar una participación democrática y transparente de las comunidades étnicas el Estado debe “aceptar y brindar información al respecto en un formato entendible y públicamente accesible” (Carrión, 2012, pág. 10). Además de otros pronunciamientos que permiten inferir que este alto Tribunal, ha establecido precedentes jurisprudenciales que son importantes para el reconocimiento de la consulta previa, libre e informada.

4.2 Antecedentes Nacionales

Con la aprobación del pueblo en el hecho histórico para Colombia reconocido como la séptima papeleta que dio lugar a la conformación de la Asamblea Nacional Constituyente, que tenía como objetivo redactar una carta política que redefiniera el Estado colombiano y produjera un cambio a la situación política y social que atravesaba el país como consecuencia de la violencia, se abrió la posibilidad de incluir nuevos postulados al derecho constitucional colombiano, y fue con la promulgación de la constitución del año 1991, que se introdujo la base de fundamentos democráticos, pluralistas y participativos que reivindicaron a las minorías que hasta ese entonces habían sufrido serios tratos discriminatorios por parte del Estado y de la sociedad misma. Para comprender de una manera más clara los postulados y las finalidades de la Constitución política de 1991 y como estos influyeron en el reconocimiento de derechos y libertades para las comunidades étnicas en Colombia, es conveniente explicar por lo menos el modelo de Estado en el que se sustentaba la Constitución de 1886 y el que surgió con la promulgación de la Constitución Política de 1991.

4.2.1. Estado de Derecho

La Asamblea Nacional Constituyente en la redacción de la Constitución Política de 1991, realizó una reestructuración de lo que era el modelo de Estado que persistía en Colombia desde el año 1886 que podía ser entendido como un Estado de Derecho, y que se reducía a la noción básica del concepto; basado en los siguientes elementos:

- 1) **Supremacía Legal:** Se entiende que cada actuación realizada por los ciudadanos debe llevarse a cabo bajo lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, dilucidando que la misma rige para gobernantes y ciudadanos y como ya se indicaba en el artículo sexto de la declaración francesa de 1789 “la ley es la expresión de la voluntad general” (Díaz y Ruiz, 2013, págs. 65-66). Es decir que debe ser “creada con libre participación y representación de los integrantes del grupo social” (Díaz y Ruiz, 2013, págs. 65-66).
- 2) **División de Poderes:** Legislativo, Ejecutivo y Judicial, donde cada uno goce de total independencia en sus actuaciones (Díaz y Ruiz, 2013, pág. 66).

- 3) **Fiscalización de la Administración:** Control de las tres ramas del poder público en todas sus instituciones por medio de órganos independientes a las mismas, facultando a la ciudadanía con la posibilidad de hacer veedurías en caso de inconsistencias en sus actuaciones (Díaz y Ruiz, 2013, pág. 66).
- 4) **Derechos y Libertades Fundamentales:** Donde existan plenas garantías de justicia, libertad, dignidad humana, igualdad y propiedad para la sociedad (Díaz y Ruiz, 2013, pág. 66).

De este modelo de Estado también se desprende la facultad del uso de la fuerza regulada que claramente recae en el Estado, o en palabras de Webber: “El estado, se señala, es el monopolio legítimo de la violencia” (Díaz y Ruiz, 2013, pág. 67). Que por ningún motivo puede ser ilegítimo, es decir que el Estado no puede combatir la violencia por medio de actuaciones delictivas (Díaz y Ruiz, 2013, pág. 67). Por otro lado, la Corte Constitucional al referirse al Estado de derecho, deja en claro que cada actuación realizada por el Estado debe estar dentro de lo dispuesto en el ordenamiento jurídico preexistente a la actividad realizada por el mismo, y que por ningún motivo puede ejercer sus funciones desconociendo las leyes vigentes al momento de realizar dicho acto (Corte Constitucional, Sala Plena SU 747/98 MP: Eduardo Cifuentes, 2 de diciembre de 1998).

4.2.2. Estado Social de Derecho

Los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente propusieron un nuevo modelo de Estado, tomando como base el ya existente en la Constitución de 1886, pero acorde con nuevas tendencias que surgían en el mundo acerca de la forma en la que se debía consolidar una nación, es así como en el artículo primero de la constitución de 1991 se consagra uno de los principios fundamentales más importantes de esa carta política, y es el Estado Social de Derecho, un modelo que a priori se mostraba más liberal y garantista de derechos y libertades para los ciudadanos y que como lo asegura (Rondon, 2004) se crea como “una noción que surge ante la desigualdad real que existe en los grupos sociales” (pág. 404). Situación latente en ese momento de la historia para Colombia y que aún persiste en nuestra sociedad. Tal como plantea Brewer este modelo trae consigo una serie cambios en los que predomina un sistema democrático, llevado a todas las circunstancias posibles de la sociedad, es decir que por medio de este podemos constatar cómo se democratiza la política, la participación popular, los derechos

fundamentales, sociales, económicos y culturales y todos aquellos que encontramos en el título II de la carta política y en general en el sistema jurídico de un Estado (Bermúdez y Morales, 2012, pág. 56). Establecido lo anterior es factible comprobar cómo el Estado Social de Derecho le garantiza a las minorías derechos, libertades y participación en la construcción de una ciudadanía con mayor equidad social.

Por otro lado la Corte Constitucional también se ha referido a este tema y en la sentencia C-566/95 señala que las bases de este modelo son la libertad, la igualdad y la seguridad y que su objetivo primordial es buscar que se concreten esos derechos en la sociedad (Corte Constitucional Sala Plena, C-566/1995, MP: Eduardo Cifuentes, 30 de noviembre de 1995). Ciertamente la adopción de este modelo de Estado, abrió la posibilidad que en Colombia se le reconocieran una gama de derechos más amplios a las minorías que siempre han sido excluidas y discriminadas por un Estado ausente que poca reacción ha tenido frente a la desigualdad que estas padecen. Pero además del Estado Social de Derecho, en la Constitución de 1991 se introdujeron dos postulados igual de importantes a este, que se encuentran en el artículo primero y séptimo de la carta política, que son la concepción de un Estado pluralista y el reconocimiento de Colombia como un Estado proteccionista de la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana (Orduz, 2014, pág. 9).

Es así como por medio de la inclusión de estos postulados constitucionales en nuestra carta política, se creó la posibilidad de que los grupos étnicos en Colombia gozaran de garantías constitucionales, y por medio del bloque de constitucionalidad consagrado en el artículo 93 del mismo cuerpo normativo, se empezara a concretar derechos de rango constitucional para estas minorías con la promulgación de la ley 21 de 1991, que se encargó de regular y adaptar a nuestro ordenamiento jurídico el convenio 169 de la OIT, que resultó ser una ley amplia y ambigua. Es por estas razones que la Corte Constitucional colombiana por medio de su jurisprudencia tuvo que pronunciarse acerca de algunas situaciones que la ley no preveía y que en su aplicación implicaba una falta de garantías para las comunidades que regulaba. Lo anterior demostró que este alto tribunal es el órgano más interesado en Colombia porque a estos grupos minoritarios se les reconozcan sus derechos, y por otra parte el Ejecutivo aunque ha intentado acercarse a las decisiones tomadas por este Tribunal Constitucional no ha logrado garantizar de manera efectiva la Consulta Previa y de otro lado el Congreso de la República, ha tenido una posición pasiva

frente a la legislación en materia de derechos de las comunidades étnicas en Colombia (Ordúz, 2014, pág. 10).

5. Principios de la Consulta Previa

La Carta Política de 1991 en su artículo primero consagra los principios fundamentales que instituyeron los valores éticos, sociales, ideológicos y legales bajo los cuales se promulgó dicha Constitución, además de ser la base bajo la cual se crea nuestro ordenamiento jurídico; es por estas razones que cada uno de los elementos que lo comprenden deben contener estos principios, o por lo menos no ir en contravía de los mismos. Los aportes hechos por teóricos acerca de los principios generales del derecho no disienten mucho de la postura tomada anteriormente, un ejemplo de ello es (Valencia, 1993) quien afirma que estos son: “Normas fundamentales, taxativas, universales, tópicas axiológicas implícita o explícitamente positivas, que sirven para crear, interpretar o integrar el ordenamiento jurídico” (pág. 16). Por otro lado Bobbio define los principios generales del derecho como un instrumento que constituye el derecho porque significan los pilares bajo los cuales se debe crear todo el ordenamiento jurídico, agregando además que estos tienen el mismo rango de normas de carácter fundamental (Bobbio, 2005, pág. 56). A continuación, enunciaremos algunos principios que consagra la Consulta Previa.

5. 1. Buena fe: En su concepto más básico, la buena fe en el derecho hace referencia a las buenas intenciones de las personas en las actuaciones jurídicas, es decir, que su accionar no tenga como voluntad lesionar los intereses de la contraparte. Al respecto (García, 2010) expresa que: “La buena fe se trata de un principio que tiende a objetivarse, es decir, darse a conocer mediante conductas preestablecidas por la norma, por los usos sociales y las costumbres imperantes en la sociedad” (pág. 23). El numeral 2 del artículo 6 del convenio 169 de la OIT, consagra expresamente el principio de Buena Fe y en el señala que la aplicación de este, se debe efectuar en el desarrollo de toda Consulta Previa, “con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas” (Oficina Internacional del Trabajo OIT, 2014, págs. 27-28). Situación que implica que la actuación tanto del Estado como del grupo étnico se debe ceñir a este principio.

5.2. Libre Autodeterminación: En esta concepción se puede apreciar la coexistencia de dos principios que a priori son independientes, pero que se relacionan directamente entre sí para

garantizarles fundamentalmente a las comunidades étnicas, una autonomía colectiva en el aspecto social, cultural, político y económico, permitiéndoles la posibilidad de formar un estilo de vida partiendo desde su propia cosmovisión del mundo. (Bernal, 2008, pág. 19).

5.3. Debido proceso: Este principio guarda estrecha relación con el derecho de igualdad o equidad procesal, que en el desarrollo de un proceso implica que a quienes forman parte del mismo se les sean reconocidas unas mismas oportunidades en cada una de las etapas del proceso, del mismo modo está asociado al principio de audiencia previa, que tiene como propósito poner en conocimiento a la contraparte la situación jurídica en la que está inmersa, además de garantizar su representación efectiva dentro del proceso (Rodríguez, 1998, págs. 1305-1306). Cabe resaltar que la vulneración de estos principios generaría una nulidad en la actuación.

6. Disposiciones del Convenio 169 de la OIT en Relación con la Consulta Previa

Como consecuencia de la discriminación sufrida por los pueblos indígenas alrededor del mundo y la explotación laboral de la que eran víctimas estos grupos minoritarios, la comunidad internacional en cabeza de la OIT decidió adoptar una serie de disposiciones legales que pusieran fin a esos tratos excluyentes, y de esa forma generar ambientes de equidad dentro de la sociedad, es por este motivo que nace el Convenio 169 de la OIT, que dentro de su articulado contiene preceptos legales que contribuyen a cerrar la brecha social en la que se encuentran estas minorías. En efecto, en el siguiente apartado del presente artículo se explicará los elementos más significativos que han sido introducidos por este Convenio:

6.1. Consulta y Participación: Son integrados al Convenio como principios fundamentales de la democracia y como derechos fundamentales universales, que les permiten a las comunidades indígenas decidir sobre aquellas situaciones que los pueden afectar directamente. Respecto a estos derechos el Convenio 169 de la OIT en su artículo 6, hace referencia a la consulta como mecanismo de participación, y en el plantea cuatro elementos importantes que pueden ser entendidos como las principales directrices sobre las cuales se debe desarrollar la Consulta Previa: i) los gobiernos deben “consultar a los pueblos interesados; ii) mediante procedimientos apropiados; iii) a través de instituciones representativas; y iv) cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente” (Oficina Internacional del Trabajo OIT, 2014, pág. 6). Estos elementos incentivan y permiten un acercamiento entre el

Estado y las comunidades étnicas y otorgan garantías y derechos a estos dos actores, reduciendo de esta forma las posibles desventajas en las que se puedan encontrar por su condición de grupo minoritario.

Estos principios y derechos fundamentales en la práctica del Convenio 169 de la OIT están estrechamente relacionados, y en su desarrollo no pueden ser apartados porque los pueblos no solo deben exponer sus apreciaciones acerca de los proyectos propuestos por el Estado y los particulares, sino que están en el derecho de participar de manera efectiva y formular objeciones y proposiciones que contribuyan al desarrollo de la Consulta Previa. La interrelación de estos conceptos les garantiza a las comunidades un poder de decisión sobre sus verdaderos intereses, en lo que se refiere a procesos de desarrollo y control económico, social y cultural (Organización Internacional del Trabajo, 2013, pág. 11). Con fundamento en lo expresado anteriormente se podría concluir que la finalidad de la OIT al incluir en el Convenio 169 los derechos de participación y de consulta, lo que buscaban era garantizar que los pueblos indígenas gozaran de los derechos mínimos a que tiene lugar el resto de la ciudadanía.

6.2. ¿Quiénes Deben Ser Consultados?: El Convenio 169 de la OIT en su artículo primero consagra a quienes se le aplica las disposiciones contenidas dentro de dicho cuerpo normativo y en su literal **a** estipula que este debe ser empleado a los pueblos tribales en países independientes que tengan una cosmovisión diferente del mundo, o que sus estilos de vida, culturas y tradiciones permiten distinguirlos de otros sectores de la sociedad. Por otro lado el Convenio 169 de la OIT en el literal **b** del artículo primero se refiere exclusivamente a aquellos pueblos que son considerados como indígenas, y dentro del concepto que aporta cabe destacar que estas comunidades deben preservar las instituciones sociales, económicas, culturales y políticas que tradicionalmente han mantenido a lo largo de su historia, y que las identifican como pueblos tribales (Oficina Internacional del Trabajo OIT, 2014, pág. 20).

6.3. Tierras y Recursos Naturales: Una de las razones fundamentales por las que se creó el Convenio 169 de la OIT, fue la de reivindicar las formas de pensamiento que tienen las comunidades étnicas, y a partir de ello tratar de comprender la cosmovisión que tienen estos grupos en el mundo y reconocer esos “valores culturales y espirituales que los pueblos tribales le atribuyen a sus tierras” (Organización Internacional del Trabajo, 2013, pág. 21). Es por este motivo que la OIT dentro del Convenio consagra a favor de las comunidades derechos sobre los

territorios que les han sido reconocidos y sobre los recursos naturales existentes en esas regiones que legalmente son de su propiedad (Organización Internacional del Trabajo, 2013, pág. 21).

6.3.1. Derecho a las Tierras: De este derecho se desprenden garantías civiles para las comunidades étnicas, garantías que están consagradas en la Constitución Política de 1991 que protege la propiedad privada como un derecho social, económico y cultural (Senado de la República, 2010). De conformidad con este precepto constitucional, el Código Civil colombiano se encarga de regular aquellos derechos que se derivan de la propiedad, es así como esta normativa contiene disposiciones referentes al Dominio, Ocupación, Posesión, Tenencia y Tradición sobre derechos reales (Leyer, 2015). Estas leyes terminan siendo importantes dentro del ordenamiento jurídico porque amplían las garantías a favor de estas Comunidades permitiéndoles ejercer el derecho a la posesión sin ningún tipo de interrupción y a heredarles dichas propiedades a nuevas generaciones. Por otro lado el Convenio 169 de la OIT, señala que el traslado de las comunidades étnicas es una medida excepcional, lo que implica que su reubicación solo se debe dar en aquellos eventos en que estos pueblos se encuentren en peligro inminente, cabe resaltar que los territorios que les sean entregados por motivo de su traslado deben tener las mismas calidades y además se les debe dar la posibilidad de volver a ocupar sus anteriores terrenos, en caso de que el peligro por el cual fueron transferidos haya cesado (Organización Internacional del Trabajo, 2013, págs. 21-22).

6.3.2. Derecho a los Recursos del Subsuelo: Este tipo de recursos al igual que la tierra son quizás la materia prima de las comunidades étnicas y representan la principal fuente económica para estos pueblos, puesto que es la naturaleza la que les proporciona los productos que terminan siendo el sustento de su economía y que fusionados con sus culturas y tradiciones cumplen un proceso industrial que respeta el medio ambiente, además de generar sostenibilidad para el mismo. El numeral primero del artículo 15 del Convenio 169 de la OIT, “dispone como principio general que los pueblos indígenas tienen derecho a los recursos naturales existentes en sus tierras, que comprenden el derecho a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos” (Organización Internacional del Trabajo, 2013, pág. 22). Por otro lado el numeral dos del mismo artículo les da plena facultad a las comunidades étnicas de gozar de aquellos recursos del subsuelo que se encuentren en las regiones en las que ellos habitan, y a su vez expresa que en aquellas situaciones en las que estos recursos les pertenezcan al Estado, se les

debe garantizar la consulta previa como mecanismo de participación para evaluar los potenciales detrimentos que se les pueda generar como producto de los proyectos extractivos que se pretendan realizar, y de esta forma compensar por medio de indemnizaciones los efectos negativos ocasionados por estos proyectos (Oficina Internacional del Trabajo OIT, 2014, págs. 37-38).

6.4. Impacto para el Sector Privado: La consulta previa de cierta forma se presenta como un límite a los proyectos realizados al interior de los territorios que pertenecen a las comunidades étnicas, en pro de garantizar los derechos, culturas y tradiciones de estos pueblos, pero en mayor medida de preservar el medio ambiente de estos territorios, lo que genera un claro impacto tanto jurídico como comercial en el sector privado (Organización Internacional del Trabajo, 2013, pág. 25). Es por lo anterior que la responsabilidad de los Estados en la aplicación efectiva del Convenio, es esencial con miras a afrontar obstáculos relacionados con la legislación y prácticas adoptadas en el marco del desarrollo de la Consulta Previa (Organización Internacional del Trabajo, 2013, pág. 25). Aunque lo anterior sigue causando conflictos en el sector privado, puesto que las empresas se sienten en un campo de acción industrial bastante limitado al tener que ceñirse obligatoriamente a las reglas impuestas por la legislación interna (Organización Internacional del Trabajo, 2013, pág. 25). Y al ser “objeto de vigilancia por parte de los mecanismos de control internacionales” (Organización Internacional del Trabajo, 2013, pág. 25). Lo anterior implica que las empresas deben respetar las disposiciones internacionales adoptadas por los organismos internacionales que hayan sido ratificadas por los Estados en los que estas ejercen actividades comerciales, y por ende respetar el Convenio 169 de la OIT y los derechos de los pueblos étnicos que de este se derivan.

6.5. Jurisdicción: La Carta Política de 1991 les da facultad a los pueblos indígenas y a sus autoridades de regirse por su propia jurisdicción, además de aplicar sus propias normas y procedimientos, siempre que estos no sean contrarios a la Constitución y a la Ley colombiana, asimismo estipula que podrán hacerlo siempre y cuando se encuentren dentro de su ámbito territorial; disposiciones que además han sido protegidas por la Corte Constitucional en su jurisprudencia (Corte Constitucional Sala Tercera de Revisión, T-254, MP: Eduardo Cifuentes, 30 de mayo de 1994). La disposición constitucional mencionada anteriormente tiene plena concordancia con el Convenio 169 de la OIT, que en su artículo 9 faculta a las comunidades a

aplicar sus propios procedimientos en lo relacionado con agresiones de carácter penal, siempre y cuando estas no vulneren la Constitución, el bloque de constitucionalidad y las leyes preexistentes al acto cometido por el integrante perteneciente a ese pueblo étnico (Oficina Internacional del Trabajo OIT, 2014, pág. 32). De igual forma el Convenio 169 de la OIT en su artículo 10 estipula que cuando los integrantes de estos pueblos se hallen responsables penalmente con aplicación de leyes nacionales “deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales, y culturales” (Oficina Internacional del Trabajo OIT, 2014, págs. 32-33). Estas interpretaciones constitucionales y legislativas les dan a las comunidades étnicas no solo una mayor autonomía, sino la capacidad para que estos pueblos puedan autodeterminarse y consolidar sus propias formas de apreciar el mundo, de conformidad con sus culturas y tradiciones.

7. El Desarrollo de la Consulta Previa en algunos Países de América Latina

Este derecho en América Latina ha tenido grandes problemas en su implementación, en su gran mayoría los Estados que componen esta región y que tienen dentro de su sociedad una fuerte presencia de pueblos tribales han optado por no incluir dentro de sus agendas legislativas proyectos que permitan desarrollar y regular este derecho, aunque cabe aclarar que estos si han ratificado el Convenio 169 de la OIT. Las circunstancias mencionadas anteriormente no solo permiten evidenciar una clara ausencia de los gobiernos en estos temas, sino también demuestra que los Estados tienen poco interés en proteger derechos y garantías propios de las comunidades étnicas. Es por ello que a continuación analizaremos las experiencias de algunos países en cuanto a la aplicación de este Convenio, haciendo un recorrido por su legislación y jurisprudencia.

7.1. Bolivia

7.1.1. Constitución Política: Es la Constitución Política de 2009 el primer texto normativo que registra una introducción del Convenio 169 de la OIT en este país, de esta forma el artículo 30 de esta Carta Política le reconoce derechos a los pueblos étnicos o como ha sido denominado por el constituyente de este país, a los pueblos indígena originario campesinos que habitan en sus territorios, lo anterior guarda estrecha relación con lo consagrado en el Convenio ya mencionado, puesto que esta normativa dispone que deben ser “consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas

legislativas o administrativas susceptibles de afectarles” (Ameller, y otros, 2012, págs. 22-23). Cabe resaltar, que en este precepto legal se hace especial énfasis en que se debe garantizar este derecho cuando el Estado o las personas jurídicas pretendan explotar recursos naturales que se encuentren en el subsuelo, en aquellas regiones que sean propiedad de estas comunidades (Ameller, y otros, 2012, págs. 22-23). Como se puede apreciar esta Constitución reconoce garantías y derechos a las comunidades étnicas, una de ellas es la autonomía que le otorga a este tipo de grupos al permitirles a los indígenas originarios campesinos “participar, desarrollar y ejecutar los mecanismos de consulta previa, libre e informada relativos a la aplicación de medidas legislativas, ejecutivas y administrativas que los afecten”. (Ameller, y otros, 2012, págs. 23-24).

7.1.2. Ley Referente a la Explotación de Hidrocarburos y Decreto que Regula su Procedimiento: La normativa de Hidrocarburos expedida por el Congreso boliviano dentro de todo su articulado toca tres aspectos que son importantes en cuanto a los derechos garantizados por el Convenio 169 de la OIT, i) los pueblos campesinos indígenas originarios deben ser consultados en aquellos eventos en los que el Estado o los particulares pretendan llevar a cabo explotaciones de recursos hidrocarbúferos en los territorios pertenecientes a los pueblos tribales, ii) la consulta es obligatoria y debe ejecutarse antes de desarrollar el proceso de licitación y el estudio de evaluación, e impacto ambiental, iii) en lo relacionado con temas de impactos sociambientales generados en sus territorios deben ser compensados económicamente por los titulares de las explotaciones de recursos hidrocarbúferos (Ameller, y otros, 2012, pág. 24). Si bien es cierto esta ley se encargó de reconocerle dentro del ordenamiento jurídico boliviano algunos derechos y garantías a las comunidades étnicas, no trató temas referentes a los procedimientos bajo los cuales se debía realizar la Consulta Previa, es por esta razón que se expide el Decreto Supremo Reglamentario No. 29033 que consagra disposiciones para el desarrollo de este mecanismo de participación dentro del marco de las actividades hidrocarbúferas (Ameller, y otros, 2012, pág. 25). Uno de los aspectos importantes que trae este Decreto es que le da la oportunidad a los Pueblos Indígenas Originarios y Campesinos de impugnar aquellos resultados cuando estos han sido incorporados al proceso de forma incorrecta, o cuando los mismos no reflejan lo convenido en los Estudios de Impacto Ambiental, situación que dará lugar a posibles sanciones administrativas en contra de la empresa encargada de realizar estos estudios (Ameller, y otros, 2012, págs. 26-27).

7.1.4. Pronunciamientos del Tribunal Constitucional Boliviano Relacionado con la

Consulta Previa: El caso más relevante del Tribunal Constitucional boliviano en relación con la Consulta Previa es el de no conformidad del pueblo Guaraní de ItakaGuasu “en contra de la Secretaría Departamental de Caminos (SEDECA) de Tarija, la misma que firmó un contrato de alquiler con la empresa Petrosur en un campamento que, si bien era de dicha Secretaría, se encontraba en la TCO ItikaGuasu” (Ameller, y otros, 2012, pág. 29). Este grupo étnico argumentaba en el texto de No Conformidad presentado ante el Tribunal Constitucional que este contrato causaba una afectación directa a su territorio, lo anterior sustentado en las leyes 1257 y 3760 (Ameller, y otros, 2012, pág. 30). “A raíz de ello, SEDECA presentó un amparo Constitucional en contra de la asamblea de este Pueblo Indígena, pues la no conformidad expuesta por ésta afectaba las relaciones con la empresa antes citada” (Ameller, y otros, 2012, pág. 30). Sin embargo la Sentencia 2003/2010-R, estableció que: “La consulta previa es un deber del Estado en todos sus niveles y, por lo tanto, debe realizarse a través de instituciones representativas de los pueblos indígenas; asimismo, esta consulta debe ser realizada de buena fe” (Ameller, y otros, 2012, pág. 30). En este pronunciamiento este órgano Constitucional también se encargó establecer los eventos en los que es obligatorio realizar la Consulta Previa y las situaciones en que los Estados deben conseguir de buena fe la aprobación por parte de los pueblos tribales (Ameller, y otros, 2012, pág. 30).

7.2. Perú:

7.2.2. Pronunciamientos del Tribunal Constitucional Peruano Relacionado con la Consulta

Previa: Una de las decisiones que mayor relevancia ha adquirido en materia judicial en cuanto a la protección del derecho a la Consulta Previa es la demanda de incumplimiento interpuesta por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana en contra del Ministerio de Energía y Minas, en donde esta comunidad le exigía a la entidad ya mencionada el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT, el cual hasta ese momento no había sido aplicado dentro del territorio peruano (Ameller, y otros, 2012, pág. 200). Este proceso en última instancia es de conocimiento del Tribunal Constitucional de Perú, quien en su decisión le ordena al Ministerio de Energía y Minas reglamentar la Consulta Previa, y además exhorta al Congreso de la República de Perú a que por trámite legislativo expida una ley que proteja este derecho y le otorgue garantías a las Pueblos Tribales; con el fin de evitar futuras vulneraciones a los derechos de estas Comunidades

(Ameller, y otros, 2012, pág. 200). Del mismo modo esta sentencia fue “la primera en señalar la importancia de la diversidad cultural y reconocer que existen distintos modelos de desarrollo cuando hablamos de los pueblos indígenas” (Ameller, y otros, 2012, pág. 200). Así mismo determinó “que el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas es la base para el derecho a la Consulta Previa” (Ameller, y otros, 2012, pág. 201).

7.2.3. Ley 29785: El Congreso peruano luego del exhorto dado por el Tribunal Constitucional, expidió una ley acorde a lo dispuesto en el Convenio 169 de la OIT, esto con el propósito de proteger los derechos de los Pueblos Tribales. Cabe destacar que revio a la promulgación de esta ley la legislación peruana solo contaba con el Decreto expedido por el Ministerio de Minas y Energía que regulaba el derecho a la Consulta Previa para actividades minero energéticas (Ameller, y otros, 2012, pág. 202). Esta normativa fue fuertemente criticada por tres razones: “Por los procedimientos que planteaban para realizar la Consulta y porque no respetaba los estándares internacionales y estaba más orientada a brindar información que a Consultar realmente a los Indígenas” (Ameller, y otros, 2012, pág. 202).

7.2.4. Decreto Supremo No. 001-2012-MC: Por medio del cual se reglamenta la Ley No. 29785, además de describir una serie de procedimientos que la complementan. El ámbito de esta ley es taxativo, puesto que solo se aplica en medidas administrativas y legislativas, así mismo el Decreto consagra el procedimiento que se debe cumplir en el desarrollo de la Consulta Previa, además señala que la decisión adoptada en esta es vinculante, sin embargo esta ley contempla una situación que implica una clara vulneración del consentimiento de los Pueblos Tribales, y es que en un apartado de la misma se estipula que “si no se llegase a ningún acuerdo, la entidad encargada de llevar a cabo el proceso de consulta puede emitir dicha decisión consultada” (Ameller, y otros, 2012, pág. 212). Es evidente que esta disposición faculta al encargado del proceso, a aprobar la consulta quebrantando la buena fe de las comunidades.

7.3. México:

7.3.1. Legislación Referente a los Pueblos Tribales: La ley de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas intentó desarrollar el derecho a la Consulta Previa, puesto que antes de su promulgación la protección de este derecho era mínima dentro de su ordenamiento jurídico, pero con su entrada en vigencia se logró la aprobación de un procedimiento que le permitió a los

Pueblos Tribales intervenir en cada una de las etapas de los planes de desarrollo realizados por el Estado, lo que generó un acercamiento de estas Comunidades a las políticas públicas ejecutadas por el gobierno (Carrión, 2012a, pág. 15). La Consulta Previa en México sigue teniendo escenarios de dialogo, pero como se puede apreciar no han representado mayores avances en materia legislativa, lo que implica una aplicación poco efectiva de este derecho.

Del análisis realizado de estos tres países se puede concluir que cada uno de ellos tiene un interés real en abrir escenarios que permitan debatir una introducción de leyes que garanticen una aplicación efectiva de la Consulta Previa, Libre e Informada en sus ordenamientos jurídicos. No obstante, existen obstáculos que impiden que este derecho se materialice por medio de leyes que otorguen su desarrollo eficiente, dichos impedimentos en su mayoría se derivan de contextos políticos, económicos y sociales, particulares, que son necesarios con el fin de agrupar una serie de experiencias que contribuyan a la realización de normativas que regulen este derecho. (Carrión, 2012, pág. 15).

8. Consultas Previas en Colombia

Como se ha mencionado anteriormente los avances de la Consulta Previa en materia legislativa en nuestro país han sido escasos, incluso se puede apreciar una omisión del Congreso en la promulgación de leyes que regulen estos temas, es por esto que la Corte Constitucional ha tenido que suplir esta ausencia del legislativo con pronunciamientos jurisprudenciales que reglamenten este derecho que es consagrado como fundamental en sus sentencias, lo que significa que este puede ser exigido por vía de Tutela. Esta corporación además ha sustentado sus decisiones en la importancia que le da la Carta Política a la diversidad existente en la nación colombiana, y en sus pronunciamientos ha establecido unos lineamientos que han garantizado la efectividad de este derecho (Orduz, 2014, pág. 10).

Por otro lado el gobierno colombiano ha promulgado Decretos que aunque no contienen procedimientos concretos que regulen este derecho, si reglamentan algunos eventos en los que se permite desarrollar la Consulta Previa, una muestra de ello es el Decreto 1320 de 1998 que tiene disposiciones referentes a la explotación de recursos naturales, y en el que solo se exige el cumplimiento de un procedimiento breve “en donde el gobierno se limita a certificar la presencia de Comunidades Étnicas y a participar en una reunión de Consulta Previa” (Orduz, 2014, pág.

13). Sin embargo el más alto Tribunal Constitucional en Colombia por medio de la sentencia T-652 de 1998 señala que esta normativa “no cumple con los estándares de Consulta Previa, además que no fue consultada” (Orduz, 2014, págs. 13-14). Situación que también ocurrió con la Directiva 01 de 2010 y el Decreto 2613 de 2014, donde el primero regula asuntos y etapas de la Consulta Previa, e indica que su resultado no es vinculante, y la segunda disposición reglamenta los momentos en los que se debe aportar comprobantes que demuestren que estas Comunidades están ubicadas en las regiones en las que pretende realizar los proyectos públicos o privados (Orduz, 2014, pág. 14). La Consulta Previa contiene elementos de gran relevancia y que deben ser tenidos en cuenta al momento de su realización, es por ello que a continuación analizaremos esos aspectos que son importantes para este mecanismo de participación:

8.1. Participantes de la Consulta Previa: La participación de los diferentes actores se debe al papel que deban cumplir en el desarrollo de estos procedimientos. Dicho lo anterior se puede entender que al llevar a cabo la Consulta Previa existe un extremo pasivo y otro activo dentro del proceso, entendiendo al Estado como esa parte pasiva que además debe actuar a través de sus instituciones, como por ejemplo el Ministerio del Interior que interviene a través de la dependencia de la Dirección de Etnias, la cual está adscrita a esta entidad y es la encargada de liderar todo el proceso, y los responsables del proyecto., por otro lado encontramos a la Comunidad Étnica como la parte activa del proceso, puesto que es ella quien vela por la protección de sus derechos a través de sus instituciones representativas. Otra entidad que es participe dentro de este proceso y que cumple un papel relevante en su desarrollo es el Ministerio Público compuesto por la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y las Personarías, este órgano cumple un papel bastante importante dentro del proceso, ya que se encarga proteger los derechos de los Pueblos Tribales (Rodríguez, 2010a, pág. 50). Los actores mencionados anteriormente son participantes obligatorios dentro de las Consultas Previas y sin importar el proyecto que se pretenda realizar deben estar presentes en su desarrollo, pero en estos procedimientos también existen algunos participantes condicionales, porque su asistencia depende de que la consulta involucre algunas circunstancias especiales, tal es el caso del INCODER, que solo participa cuando el proyecto a llevar a cabo involucra territorios de estas comunidades, o en el evento en que se pretenda realizar una obra que involucre la exploración o explotación de recursos del subsuelo que se encuentren al interior de sus territorios, quien deberá

estar presente es la autoridad ambiental competente para conceder la respectiva licencia o autorización ambiental (Rodríguez, 2010a, págs. 50-51).

8.2. Asuntos Que Cobija la Consulta Previa: De acuerdo con el pronunciamiento realizado por el máximo Tribunal Constitucional colombiano en la sentencia SU-383/03, el criterio principal a tener en cuenta para realizar la Consulta Previa es la afectación directa a los Pueblos Tribales como resultado un determinado proyecto, y que esta misma corporación ha titulado como “el ámbito temático de la consulta previa”. (Rodríguez, 2014b, pág. 65). En posteriores pronunciamientos la Corte ha precisado su jurisprudencia y en ella ha indicado que existen diferentes tipos de afectaciones directas, señalando que estas pueden ser pasivas o activas y que se produce la primera de ellas cuando se generan alteraciones negativas que ocasionan perjuicios y cambios en las formas de vida y en las estructuras sociales de estos pueblos, pero estos cambios también pueden ser positivos, lo cual ocurre cuando ese impacto trae consigo beneficios para las comunidades (Rodríguez, 2014b, pág. 65). Por otro lado la sentencia C-030/08 adicionó que solo se deben consultar aquellas disposiciones susceptibles de afectarles directamente y no la ley en general (Rodríguez, 2014b, pág. 68). Una vez establecidos estos criterios por la Corte Constitucional, esta misma corporación ha considerado como obligatorio la ejecución de la Consulta Previa en varios eventos, a continuación analizaremos los más importantes:

8.2.1. Consulta Previa en Medidas Legislativas: Cabe aclarar que dentro de esta concepción se debe tener en cuenta la ley tanto en sentido formal, como en sentido material, puesto que las dos medidas pueden generar serias afectaciones a los Pueblos Tribales; en cuanto a la ley en sentido formal o *stricto sensu*, se recurre a una visión particularmente formal de la misma, atribuida al producto de la labor ejecutada por el Legislador, a través de un procedimiento legislativo y construida en forma de ley, o en palabras de Dietrich Jesch: “Por ley en sentido formal debe entenderse todo acto parlamentario revestido de la forma de la ley, sin consideración a su contenido” (Fuentes, 2017, pág. 119). Así por ejemplo podemos encontrar leyes ordinarias, orgánicas, estatutarias, marco o cuadro. Por otra parte encontramos la ley en sentido material, que sin ser creada por el Legislador tiene fuerza de ley, es decir, que a pesar de no proceder de este órgano legislativo que es quien ostenta la facultad constitucional de crear leyes, y de no tener el proceso exigido por la ley quinta y la Constitución en sus artículos 151 y 152 tiene ese mismo rango dentro del ordenamiento jurídico (Fuentes, 2017, pág. 129). Así por ejemplo

podemos encontrar decretos ley o extraordinarios, decretos legislativos, decretos especiales o el Plan Nacional de Inversión. En relación con lo mencionado anteriormente, algunas de las leyes que deben consultarse según la sentencia C-030 de 2008 de la Corte Constitucional son:

Ley general de educación, el Plan Nacional de Desarrollo, una reforma del sistema de seguridad social o del código laboral, o del código penal. Adicionalmente, el proceso deliberativo, público y participativo que se surte en el Congreso de la República debe someterse a un proceso específico de consulta con las comunidades indígenas y tribales (Rodríguez, 2014b, pág. 68).

8.2.2. Tratados Internacionales: El máximo Tribunal Constitucional colombiano en la sentencia C-615 de 2009 adoptó la postura de que se desarrolle el procedimiento de Consulta Previa a las leyes que integren al Bloque de Constitucionalidad, aclarando que esta debe hacerse antes de que el Presidente de la República radique en el Congreso el tratado internacional con el propósito de que se convierta en ley de República, y por ende haga parte del ordenamiento jurídico (Rodríguez, 2014b, pág. 70). De acuerdo con lo anterior se puede concluir que el momento oportuno para adelantar el proceso de Consulta Previa es durante la negociación, puesto que este es el periodo apropiado para que el Gobierno escuche a las comunidades étnicas y evalúe las potenciales afectaciones que se les pueda ocasionar, y presente ante los posibles firmantes del Tratado las objeciones manifestadas por los Pueblos Tribales. Pero en esta sentencia también se permite desarrollar la Consulta Previa después de aprobar el Tratado, situación que obligaría al Estado a renegociar el mismo, en el evento en que las Comunidades presenten propuestas que impliquen cambios sustanciales del texto normativo (Rodríguez, 2014b, pág. 70).

8.2.3. Consulta Previa en Medidas Administrativas: Es pertinente aclarar qué medidas administrativas son todas aquellas expedidas por el Ejecutivo en cumplimiento de su función administrativa (Rodríguez, 2014b, pág. 85). Como por ejemplo: “las licencias, autorizaciones o permisos ambientales, concesiones, ejecución de programas de fumigación de cultivos ilícitos o la contratación de una obra” (Rodríguez, 2014b, pág. 85).

8.2.4. Asuntos Ambientales: En los eventos en que se otorgue una licencia que pueda generar “deterioro grave a los recursos naturales renovables, o al ambiente, o introducir modificaciones

considerables o notorias al paisaje” (Rodriguez, 2014b, pág. 88). Es obligatorio efectuarla Consulta Previa. Por otro lado en aquellos territorios pertenecientes a las Comunidades Étnicas, es imprescindible ejecutar este derecho porque, “Dicha licencia sujeta al cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y obligaciones que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada” (Rodriguez, 2014b, pág. 88). Lo anterior tiene la finalidad de proteger la seguridad y subsistencia de los Pueblos Tribales, por medio de una participación activa de estos, según lo decidido por la Corte Constitucional en la sentencia SU-039 de 1997. También es obligatorio realizar Consultas Previas en aquellos casos en los que se otorguen permisos y autorizaciones ambientales. (Rodriguez, 2014b, pág. 90).

9. Etapas para la Ejecución de la Consulta Previa

En la ejecución de la Consulta Previa no existe un procedimiento único regulado por la ley y la jurisprudencia, dado que en cada caso se debe atender a circunstancias particulares de las Comunidades con las que se pretenda consultar, además de la obligación del Ministerio del Interior de iniciar una concertación con los Pueblos Étnicos acerca de la metodología a emplear dentro del proceso, que tiene como primera fase la aproximación para que las Comunidades tengan no solo un conocimiento acerca del objetivo de la obra o proyecto, sino de una explicación clara y completa acerca del derecho a la Consulta Previa (Rodriguez, 2014b, pág. 126). Sin embargo, se debe cumplir con unos pasos que garanticen este derecho, los cuales son: “i) acercamiento, ii) preconsulta, iii) apertura o instalación iv) taller de identificación de impactos v) protocolización vi) seguimiento y posterior cierre” (Rodriguez, 2014b, págs. 126-127). Etapas que también se cumplen en los proyectos ambientales que requieren de licencias, puesto que éstas también pueden ocasionar afectaciones directas a los Pueblos Tribales, en este tipo de eventos concretamente se debe cumplir con las siguientes fases: “i) etapa previa o pre consulta, ii) etapa de realización de la Consulta y, iii) etapa de seguimiento control y cierre” (Rodriguez, 2014b, pág. 130).

10. La Consulta Previa en las Decisiones Adoptadas por la Corte Constitucional

Como ya hemos hecho referencia anteriormente es este órgano judicial el que en Colombia se ha encargado de abordar y regular el tema de la Consulta Previa por medio de fallos judiciales,

supliendo la poca legislación que existe respecto a este tema. Con el fin de complementar un poco más las decisiones tomadas por este alto Tribunal y ampliar la visión que tiene esta corporación con relación a este derecho, a continuación, analizaremos algunas decisiones en las que se evidencia la postura adoptada por la Corte en materia de derecho sustancial y procesal, que termina brindándole garantías a la Consulta Previa en Colombia.

10.1. Derechos Sustanciales: Entre las garantías otorgadas por la Corte Constitucional encontramos derechos de orden constitucional y fundamental que a lo largo de la historia les han sido desconocidos a los Pueblos Tribales, entre ellos encontramos los siguientes: i) “derecho a subsistir que es entendido por esta corporación como conexo al derecho a la vida”² (Vallejo, 2016, pág. 157). Así como la obligación del Estado de proveer recursos hídricos de calidad, alimentos que aseguren su nutrición y un sistema sanitario accesible³ ii) “El derecho a la integridad étnica, cultural, social y económica; el derecho a la propiedad de la tierra y el derecho a participar en la toma de decisiones que les afecten”⁴ (Vallejo, 2016, pág. 157). Que además han sido definidos por este alto Tribunal como: “los elementos básicos que constituyen su cohesión como grupo social y que, por lo tanto, son el sustrato para su subsistencia”⁵ (Vemund, Mingorance, Minelli, y Le Du, 2008, pág. 15). “Derechos que, por lo demás se han hecho extensivos a las comunidades negras” (Vallejo, 2016, pág. 157). iii) Especialmente, “la consulta previa ha sido considerada un derecho fundamental conexo a la propiedad colectiva sobre la tierra y en el que se materializan otros derechos colectivos como la libre autodeterminación, la participación, el autogobierno y la integridad cultural”⁶ (Vallejo, 2016, pág. 158). Otro derecho ha sido iv) “el reconocimiento de las comunidades tradicionales como sujetos colectivos”⁷ (Vallejo, 2016, pág. 158). v) La protección de las Comunidades incluso dándoles prevalencia sobre el interés general, o en palabras de la Corte: “La norma que establece la prioridad del

²Corte Constitucional, Sala Tercera Revisión, 13/11/1993, T-380/1993, M.P. Cifuentes, Eduardo.

³Corte Constitucional, Sala Plena, 28/11/2017, SU_698/2017. M.P. Guerrero, Luis.

⁴Corte Constitucional, Sala Tercera Revisión, 13/11/1993, T-380/1993, M.P. Cifuentes, Eduardo, Corte Constitucional Sala Séptima Revisión de Tutelas, 23/11/2011, T-693/2011, M.P. Pretelt, Jorge.

⁵ Corte Constitucional, Sala Plena, 03/02/1997, SU-039/1997, M.P. Barrera, Antonio

⁶ Corte Constitucional, Sala Plena, 13/05/2003, SU-383/2003, M.P. Tafur, Álvaro. Corte Constitucional, Sala Novena Revisión, 22/05/2006, T-382/2006, M.P. Vargas, Clara. Corte Constitucional, Sala Plena, 23/01/2008, C-030/2008, M.P. Escobar, Rodrigo. Corte Constitucional, Sala Plena, 14/05/2008, C-461/2008, M.P. Cepeda, Manuel. Corte Constitucional, Sala Plena, 18/03/2009, C-175/2009, M.P. Vargas, Luis.

⁷Corte Constitucional, Sala Primera Revisión, 24/06/1992, T-428/1992, M.P. Baron, Ciro. Corte Constitucional, Sala Tercera Revisión, 13/09/1993, T-380/1993, M.P. Cifuentes, Eduardo. Corte Constitucional, Sala Plena, 03/02/1997, SU-039/1997, M.P. Barrera, Antonio. Corte Constitucional, Sala Primera Revisión, 10/11/1998, T-652/1998, M.P. Gaviria, Carlos.

interés general no puede ser interpretada de tal manera que ella justifique la violación de derechos fundamentales de unos pocos en beneficio del interés de todos”⁸ (Vallejo, 2016, pág. 162). Cabe resaltar que la Corte también ha indicado que el mecanismo judicial idóneo para proteger el derecho a la consulta previa es la acción de tutela⁹, también es pertinente aclarar que quienes gozan de legitimidad para reclamar sus derechos fundamentales en sede de tutela son sus miembros y dirigentes¹⁰.

10.2. El Proceso de la Consulta Previa en Fallos de la Corte Constitucional: Esta corporación por medio de sus pronunciamientos se ha encargado de ajustar a derecho las diferentes normas que se encuentran vigentes en el ordenamiento jurídico colombiano y por medio de las cuales se regula el procedimiento de la Consulta Previa, es así como este órgano judicial considera que la decisión que se adopta con el libre consentimiento de las Comunidades, es esencial en el resultado de la Consulta, puesto que este protege derechos fundamentales de los Pueblos Tribales, derechos que ya se han enunciado anteriormente (Vallejo, 2016, pág. 164). Esta situación es contraria a lo dispuesto en el Decreto 1320 de 1998 que señala que este derecho solo debe cumplir con el objetivo de “analizar el impacto económico, ambiental, social y cultural que puede ocasionarse a una comunidad indígena o negra por la explotación de recursos naturales dentro de su territorio” (Vallejo, 2016, pág. 164). En otro pronunciamiento este órgano judicial manifestó que “la Consulta Previa es un proceso no una reunión. Por ello no, tiene valor de consulta la reunión informativa o la notificación hecha a una Comunidad sobre el POA que se desea desarrollar”¹¹ (Vallejo, 2016, pág. 168). Puesto que este espacio no es suficiente para la concertación y discusión acerca de un acuerdo. La Corte también señala que “la Consulta debe ser Previa, es decir, anterior al inicio de las actividades de prospección y explotación”¹² (Vallejo, 2016, pág. 169). Por otro lado afirma que: “el acuerdo de Consulta debe tener efectos sobre la decisión a adoptar”¹³ (Vallejo, 2016, pág. 169).

⁸ Corte Constitucional, Sala Primera Revisión, 05/06/1992, T-406/1992, M.P. Angarita, Ciro. Corte Constitucional, Sala Primera Revisión, 24/06/1992, T-428/1992, M.P. Barón, Ciro.

⁹ Corte Constitucional, Sala Plena, 15/11/2018, SU 123/18, M.P. Rojas, Alberto; Uprimny, Rodrigo.

¹⁰ Corte Constitucional, Sala Octava Revisión, 12/05/2011, T 379/11, M.P. Sierra, Humberto.

¹¹ Corte Constitucional, Sala Primera Revisión, 05/06/1992, T-406/1992, M.P. Angarita, Ciro. Corte Constitucional, Sala Primera Revisión, 24/06/1992, T-428/1992, M.P. Barón, Ciro.

¹² Corte Constitucional, Sala Plena, 03/02/1997, SU-039/1997, M.P. Barrera, Antonio.

¹³ Corte Constitucional, Sala Plena, 18/03/2009, C-175/2009, M.P. Vargas, Luis.

De igual forma la Corte Constitucional también indica que se deben amparar: “procedimientos apropiados que permitan la creación de espacios de negociación y de intervención de las instituciones representativas indígenas”¹⁴ (Vallejo, 2016, pág. 170). Las medidas cautelares y las medidas provisionales son otros derechos procesales con los que cuentan las Comunidades Étnicas, y sus principales funciones son proteger el debido proceso y aquellos derechos que pueden ser vulnerados; pero la Corte ha aclarado que para solicitar medidas provisionales se debe atender a una decisión “razonada, sopesada y proporcionada a la situación planteada,”¹⁵. Las Comunidades Étnicas, también gozan del derecho al debido proceso administrativo, el cual puede ser vulnerado por parte del Estado en aquellos eventos en los que este realice proyectos sin verificar el área de influencia directa de los Pueblos y afecte esas zonas que tradicionalmente son ocupadas por estos grupos¹⁶; de igual forma se vulnerará este derecho, en aquellos casos en los que el Ministerio de Ambiente no desarrolle estudios de explotación o exploración en áreas de influencia de las Comunidades que permitan comprobar una posible afectación directa a los pueblos tribales¹⁷, dentro del desarrollo de la Consulta Previa se hace imperativo consultar algunos asuntos que son importantes para la protección de este derecho, tal como lo manifestó la Corte respecto a la obligatoriedad de deliberar con la comunidades la ley del Plan Nacional de Desarrollo¹⁸. Como se puede apreciar la Corte se ha mostrado garantista en cuanto a la protección de derechos y libertades de los Pueblos Tribales, y aunque dentro de sus pronunciamientos ha tratado de hacer extensivos estos derechos a las Pueblos Afrocolombianos, no les ha reconocido las mismas garantías a las diferentes Etnias que habitan en el territorio nacional.

11. Desarrollo de la Consulta Previa en el Ejecutivo

Como ya hemos hecho referencia anteriormente esta rama del poder público ha tratado de regular este derecho por medio de decretos y de directivas presidenciales con el propósito de garantizar de forma afectiva su aplicación, y de esta manera adaptar sus medidas a las decisiones tomadas

¹⁴Corte Constitucional Sala Séptima de Revisión, 23/11/2011, T-693/2011, M.P. Pretelt, Jorge.

¹⁵Corte Constitucional Sala Novena Revisión, 23/03/2018, T-103/2018, M.P. Pretelt, Jorge, Corte Constitucional Sala Plena, 12/03/2020, SU-111/2020, M.P. Ortiz, Gloria.

¹⁶ Corte Constitucional Sala Quinta Revisión, 02/11/2016, T-605/2016, M.P. Ortiz, Gloria.

¹⁷Corte Constitucional Sala Séptima Revisión, 29/10/2009, T-769/2009, M.P. Pinilla, Nilson.

¹⁸Corte Constitucional Sala Plena, 14/05/2008, C-461/2008, M.P. Manuel, Cepeda.

por la Corte Constitucional. Con el fin de complementar un poco más los decretos expedidos por el Ejecutivo y ampliar la visión que tiene la presidencia de la república y las entidades que la componen con relación a este derecho, a continuación, realizaremos una breve descripción de algunas normas en las que se evidencia su postura respecto a la Consulta Previa. De acuerdo con lo anterior el gobierno nacional en cabeza del Ministerio del Interior es quien dentro de esta rama del poder público se ha encargado de adoptar disposiciones referentes a la aplicación de este derecho por medio de directrices que precisamente buscan otorgar garantías en su implementación, entre los diversos parámetros expedidos por esta entidad pública encontramos la directiva presidencial No. 10 de 2013 que contiene recomendaciones que orientan la realización de la Consulta Previa, de igual forma facilita la coordinación interinstitucional con el propósito de darle celeridad y eficiencia a su desarrollo y certificar si hay presencia o no de las comunidades en el territorio que se pretende llevar a cabo la obra o proyecto (Presidente de la República, 2013). Por otro lado la Directiva 08 de 2020, consagra disposiciones referentes a las etapas que se deben ejecutar para cumplir con el procedimiento de la Consulta Previa (Presidente de la República, 2020). Y la directiva 01 de 2010, señala que el proceso de Consulta Previa es competencia exclusiva del Ministerio del Interior hasta que la ley no determine competencias territoriales respecto de este derecho (Presidente de la República, 2010). También es pertinente aclarar que tal como se mencionó anteriormente estas medidas no han logrado garantizar la aplicación de este derecho.

12. Comunidades Étnicas en Colombia

En Colombia existen diferentes comunidades que por sus condiciones sociales, económicas y culturales se separan de los distintos sectores que componen la sociedad y es por tal circunstancia que gozan de especial protección por la Constitución y la ley. El Convenio 169 de la OIT en su artículo primero brinda un concepto acerca de estos pueblos y en el señala que son aquellas “cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les distingan de otros sectores de la colectividad nacional y que están regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial”. (Grueso, 2007, pág. 14). De acuerdo con la definición descrita previamente, en Colombia actualmente existen cinco Comunidades Étnicas diferentes que son:

1. **Afrocolombianos:** De conformidad con la ley 70 de 1993 estas comunidades se identifican por ser “el conjunto de familias de ascendencia Afrocolombiana que poseen una cultura propia y comparten una historia, y tienen sus propias tradiciones y costumbres dentro de la relación campo-poblado” (Parra y Rodríguez, 2005, pág. 50).

2. **Comunidades Indígenas:** Estos Pueblos son definidos por la legislación Colombiana como:

El grupo humano que vive de acuerdo con las formas de relación con el medio natural en el que se asentaron los diferentes grupos aborígenes desde antes de la conquista y lo han conservado y dinamizado a lo largo de la historia. (Parra y Rodríguez, 2005, pág. 50).

3. **Pueblos Raizales:** Se encuentran ubicadas en las Islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y son consideradas pertenecientes a esta Etnia los nativos de esta región, y que por tal razón han poblado y permanecido en esta parte del país, y que además contienen culturas, lenguas y costumbres provenientes de sus orígenes. (Parra y Rodríguez, 2005, pág. 50).

4. **Pueblos ROM:** Estos pueblos se caracterizan desde su origen por las grandes migraciones y el nomadismo. (Paternina y Gamboa, 1999, pág. 57).

5. **Palenqueros:** Son aquellos originarios de Palenque de San Basilio y fueron “esclavizados que se fugaron y se refugiaron en los palenques de la costa norte colombiana desde el siglo XV”. (Presidencia de la República, 2002, pág. 11).

13. Situación Social de las Comunidades Étnicas

La ausencia institucional y la falta de presencia del Estado en regiones alejadas del país es una situación que afecta a los Pueblos Tribales, debido a que estos se encuentran ubicados en zonas del país que a diario sufren todo tipo de hostigamientos por parte de grupos al margen de la ley, es pertinente aclarar que este tipo de situaciones muchas veces generan una vulneración de los derechos humanos de quienes padecen el conflicto armado en Colombia. Algunas circunstancias sociales que comúnmente sufren las Comunidades son:

- 1. Actos de Violencia:** Debido a las condiciones sociales que deben afrontar estas minorías y como se había dicho antes, a la poca intervención o ausencia del Estado, estas Comunidades en la actualidad enfrentan situaciones de extinción física y cultural, esto como resultado de los constantes actos de violencia, que se reflejan en , los altos índices de hostigamientos, asesinatos, amenazas, reclutamientos forzados, secuestros de líderes indígenas y defensores de Derechos Humanos, y accesos carnales o actos sexuales en contra de las mujeres pertenecientes a estas comunidades (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2010, págs. 9-10)
- 2. Situación Territorial:** Si bien es cierto el Estado colombiano le ha reconocido la propiedad de varios territorios a las Comunidades Indígenas, la disputa por la tierra con grupos armados ha generado la victimización de estos Pueblos, estas son circunstancias que claramente generan serias afectaciones a sus situaciones económicas, sociales y culturales (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2010, págs. 17-18).
- 3. Megaproyectos:** Este es otro factor que afecta seriamente a estas Comunidades, dado que las obras de infraestructura y las actividades relacionadas con la explotación y exploración de recursos del subsuelo autorizados por el Estado, se ejecutan en el interior de los terrenos que son de su propiedad y que actualmente están regulados por el Decreto 1320 de 1998. Esto termina por ser otra situación que les perturba de forma directa y que produce cambios en sus culturas y tradiciones, como producto de las modificaciones realizadas por los proyectos al paisaje y al medio ambiente existentes en sus territorios (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2010, pág. 19).
- 4. Situación Económica:** Además de la discriminación esta es otra de las razones por las que la OIT implementó el Convenio 169, puesto que estas Comunidades a lo largo de la historia han tenido que enfrentar la desigualdad y la gran brecha existente con la sociedad en general, respecto a lo relacionado con las garantías brindadas por el Estado en cuanto a derechos económicos, situación que se debe en gran parte a la falta de programas públicos que garanticen un cumplimiento efectivo de esos derechos (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2010, pág. 23).

14. CONCLUSIONES

En el desarrollo del presente artículo quedó claro que la promulgación de la Carta Política de 1991 marcó una nueva etapa del derecho constitucional colombiano, reconociendo una nueva gama de derechos que fueron clasificadas por este cuerpo normativo como fundamentales, colectivos y del medio ambiente, sociales, económicos y culturales, y la ideación del Estado Social de Derecho como modelo de Estado para nuestra nación, además le otorgó facultades a la Corte Constitucional referentes a la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, disposición que le permitió a este órgano judicial desarrollar la doctrina relativa al Bloque de Constitucionalidad con el propósito de proteger derechos de los grupos minoritarios con la integración de postulados internacionales a nuestra carta política ., Esto permitió que los Tratados y Convenios Internacionales ratificados por el Estado colombiano pertenecieran a nuestro ordenamiento jurídico; y es así como en 1991 por medio de la ley 21 se aprobó el Convenio 169 de la OIT, disposición que le garantiza derechos a los pueblos tribales por medio de la Consulta Previa, que claramente fue definida por este instrumento internacional como un derecho que debe serle aplicado previamente a las Comunidades, en aquellos eventos en los que se tomen decisiones administrativas o legislativas que puedan ocasionarles cambios en sus estilos de vida y en sus estructuras sociales, económicas y culturales.

No obstante, la aplicación de este derecho en Colombia afronta una serie de dificultades u obstáculos en su aplicación, debido principalmente a la poca legislación existente en nuestro ordenamiento jurídico, y es que tanto la Rama Legislativa como la Rama Ejecutiva se han mostrado ineficientes en adoptar medidas que regulen la Consulta Previa y que permitan garantizar de forma efectiva este derecho, aún así la Corte Constitucional colombiana ha sido el órgano que por medio de su jurisprudencia ha estipulado parámetros para su procedimiento y garantizado derechos propios de los Pueblos Étnicos, situación que permite evidenciar que este alto Tribunal Constitucional en comparación a otros Estados de la región se ha mostrado más garantista en el reconocimiento de este derecho. Si bien se puede concluir que las decisiones adoptadas por el máximo Tribunal Constitucional colombiano son importantes en un Estado de Derecho, y que para Colombia han representado la única garantía para el reconocimiento de la Consulta Previa, no son suficientes si no se cuenta con una normativa expresa, clara y precisa proveniente del legislativo, que regule la ejecución efectiva de este derecho en nuestra nación,

puesto que algunas leyes y Decretos que reglamentan este derecho y que están vigentes dentro de nuestro ordenamiento jurídico, son ambiguas y poco efectivas frente a la protección de los derechos de las comunidades. Es por estas razones que consideramos que el órgano legislativo colombiano debe expedir una norma que contenga cada una de las disposiciones sugeridas por la OIT para el reconocimiento de este derecho, ya que esta será la única forma de evitar los obstáculos que constantemente se evidencian al momento de ejecutar el procedimiento de la Consulta Previa en nuestro país.

Bibliografía

Acción de Tutela, SU 747/98 (Corte Constitucional Sala Plena Diciembre de 02 de 1998). M.P. Cifuentes, Eduardo.

Ameller, V., Chávez, D. F., Padilla, G., Mayén, G., Aparicio, L., Panay, J., y otros. (2012). El derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas en America Latina . *Konrad Adenauer Stiftung* , 11-211.

Asamblea General de las Naciones Unidas. (2010). *La situación de los pueblos indígenas en Colombia: Seguimiento a las recomendaciones hechas por el relator especial*. Organización de las Naciones Unidas.

Bermúdez, W., y Morales, J. (2012). Estado social de derecho: consideraciones sobre su trayectoria histórica en Colombia a a partir de 1991. *Cuestiones Políticas* , 56.

Bernal, D. (2008). Autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas en el marco del Estado Social de Derecho de la Constitución Política colombiana de 1991. *Revista Republicana* , 19.

Bobbio, N. (2005). *Toería general del derecho*. Bogotá: Editorial Temis .

Carrión, P. (2012). Consulta Previa Legislación y Aplicación. *Fundación Konrad Adenauer* , 9-15.

Carvajal, J. (2011). La sociología jurídica y el derecho. *Prolegómenos Derecho Y Valores* , 114-115.

Caso del pueblo Saramaka vs Surinam (Corte Interamericana de Derechos Humanos 28 de Novembre de 2007).

Código Civil Colombiano, Art. 669 (2015). Edición 34. Editorial Leyer.

Constitución Política de Colombia, Art. 58 (2010). Segunda Edición. Editorial. Senado de la República.

Díaz, e., y Ruiz, A. (2013). *Filosofía política II teoría del Estado*. Madrid: Editorial Trotta S.A.

Directiva Presidencial No. 02 de 2020 (Edición 1 2020).

Directiva Presidencial No. 10 (Edición 1 2013).

Directiva Presidencial No. 01 (Edición 1 2010).

Estado social de derecho, C-566/1995 (Corte Constitucional Sala Plena 30 de Noviembre de 1995). M.P. Cifuentes, Eduardo.

Fuentes, E. (2017). Legislación en sentido material . 119-148.

Garcia, D. (2010). *Principio de la buena fe en materia de derecho civil: Fundamento constitucional y aplicación jurisprudencial en el distrito judicial de*. Bogotá.

Grueso, L. (2007). El derecho de los pueblos indigenas a la consulta previa, libre e informado. *ACNUR* , 14.

Jurisdicción especial indígena, T-254/94 (Corte Constitucional Sala Tercera de Revisión 30 de Mayo de 1994). M.P. Cifuentes, Eduardo.

Oficina Internacional del Trabajo OIT. (2014). *ILO.ORG*. Recuperado el 05 de Septiembre de 2020, de ILO.ORG: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_345065.pdf

Orduz, N. (2014). La consulta previa en Colombia. *Instituto de Investigación en Ciencias Sociales* , 8-14.

Organización Internacional del Trabajo. (2013). Comprender el Convenio sobre Pueblos Indigenas y Tribales 1989 (Num 169) Manual para Mandates Tripartitos de la OIT. *Oficina Internacional del Trabajo* , 1-49.

Parra, C., y Rodríguez, G. (2005). *Comunidades étnicas en Colombia cultura y jurisprudencia*. Bogotá: Centro Editorial Universidad del Rosario.

Paternina, H., y Gamboa, J. (1999). Los Gitanos: tras la huella de un pueblo nomade. *Nomadas* , 157.

Presidencia de la República. (Octubre de 2002). Palenque de San Basilio obra maestra del patrimonio intangible de la humanidad. *Palenque de San Basilio obra maestra del patrimonio intangible de la humanidad* . Bogotá, Bogotá, Colombia.

Ramírez, C. (2011). Modelo interactivo funcional del sistema de televisión . *Revista Prolegómenos-Derechos y valores* , 63.

Rodriguez, G. (2014b). De la consulta previa al consentimiento, libre, previo e informado a pueblos indígenas en Colombia. 65-138.

Rodriguez, G. (2010a). La consulta previa con pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes en Colombia. 50-54.

Rodríguez, V. (1998). El debido proceso legal y la convención americana sobre derechos humanos. *Liber Amicorum* , 1305-1306.

Rondon, H. (2004). De las responsabilidades. Base legal. Criterios para diferenciar la responsabilidad administrativa de la responsabilidad disciplinariaa, civil y penal. Responsabilidad solidaria. *FUNDIL* , 404.

Sierra, J. (2017). La importancia de decolonizar el derecho internacional de los derecho humanos: el caso de la consulta previa en Colombia. *Derecho del Estado* , 140.

Valencia, H. (1993). *Nomoarquica, principalistica o de los principios generales del derecho* . Bogotá : Editorial Temis .

Vallejo, F. (2016). El proceso de la Consulta Previa en los fallos de la Corte Constitucional colombiana. *Estudios Constitucionales* , 157-170.

Vemund, O., Mingorance, F., Minelli, F., y Le Du, H. (2008). Marco legal para los derechos de los pueblos indígenas en Colombia. *Human Rights Everiwhere* , 15.